

Editorial

Los “escuadrones de la muerte”: el pasado sigue siendo presente

Los “escuadrones de la muerte” han sacudido al país una vez más con su brutalidad y sevicia en lo que pareciera —y debiera— ser su última batalla contra quienes buscan su desarticulación. La serie de asesinatos de dirigentes del FMLN, las amenazas de muerte contra los candidatos de la oposición, las bombas incendiarias, el asesinato de uno de los asesinos de un dirigente del FMLN poco antes de ser capturado, las protestas callejeras, la indiferencia del gobierno y las acusaciones de unos y otros han hecho presente un pasado que algunos pensaban olvidado y borrado para siempre. Con el desafío abierto por los “escuadrones de la muerte” el pasado ha resurgido.

Llevados más por la propaganda que por la realidad del proceso y movidos más por el deseo que por los hechos, los voceros de ONUSAL, del gobierno y de los partidos políticos, incluido muchas veces el FMLN, han subrayado la ejemplaridad de la transición salvadoreña, olvidando que hay acuerdos importantes no cumplidos aún, en especial en el área de los derechos humanos. Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover los derechos humanos —como la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el IDHUCA— han advertido sobre la existencia de los “escuadrones de la muerte”, insistiendo en la amenaza que ello supone para el proceso y para el futuro el país. En Nueva York, el Secretario General al fin llamó la atención, sin mucho éxito, sobre las recomendaciones no cumplidas de la Comisión de la verdad.

Por lo demás, pareciera que la repetición de frases estereotipadas sobre los éxitos del proceso salvadoreño pudiera dar paso a las transformaciones sociales pedidas por los acuerdos de paz. El mismo FMLN también se ha dejado llevar por este espejismo al concentrarse, al menos

Si algo ha caracterizado la actuación del gobierno de Cristiani en el área del delito es la no investigación...

en público, más en lo político electoral que en los acuerdos no cumplidos.

La nueva ola de crímenes políticos y de amenazas pre-electorales demuestra que la realidad no cambia con recetar olvido a la población ni movida por una especie de "ritmo natural", "evolución" lo llama el presidente Cristiani en su último discurso en la asamblea general de Naciones Unidas, con lo cual quiso decir que "el ritmo de las transformaciones se da de manera irresistible", produciendo "un reordenamiento casi espontáneo". La realidad sólo cambia cuando se actúa sobre ella y en la dirección hacia la cual se quiere cambiar. Pensar que las transformaciones sociales se darán de manera espontánea es una grave irresponsabilidad y, en definitiva, implica pasividad. Los costos sociales, políticos y personales por no haber acogido rápidamente las recomendaciones más importantes de la Comisión de la verdad son evidentes.

Los "escuadrones de la muerte" nunca dejaron de existir, puesto que nunca fueron desarticulados. Después de la firma de los acuerdos de paz disminuyeron su actividad temporalmente, pero luego, poco a poco, han ido reanudando sus actividades mortales y como no se les ha puesto freno, cada vez se han atrevido a más, hasta llegar al extremo del crimen político. Estos asesinatos cometidos a sangre fría, en la vía pública, a plena luz del día, con el rostro descubierto, evidencian la existencia de estos grupos armados que, indudablemente, operan protegidos por la impunidad. De esta manera, quienes aún tenían dudas o se negaban a reconocer su existencia se han quedado sin argumento válido.

Pocos días antes de que estos asesinatos fuesen percibidos en toda su trascendencia, y ante las repetidas denuncias del arzobispado de San Salvador sobre la actividad de los "escuadrones de la muerte", el gobierno negó públicamente la existencia de "escuadrones de la muerte" y hasta se mostró sorprendido de que, siendo una cosa del pasado, alguien hablase de ellos todavía. Con la autosuficiencia y la prepotencia tan característica del gobierno actual, el Ministro de la Presidencia pidió pruebas al arzobispado de San Salvador. Pocas horas después de que Mons. Rosa respondiera a dicho ministro, advirtiéndole que "los frutos amargos de estas estructuras siguen recogándose semana a semana", un dirigente del FMLN era asesinado por los "escuadrones de la muerte". Este asesinato y los que siguieron inmediatamente después desautorizaron las afirmaciones gubernamentales y dejaron sin fundamento las timideces y circunspecciones de Naciones Unidas.

Las denuncias del arzobispado de San Salvador se fundamentan en

los registros que lleva su Oficina de Tutela Legal, que ha podido comprobar un promedio de tres asesinatos semanales atribuibles a "escuadrones de la muerte". El seguimiento que el IDHUCA hace del crimen en la prensa escrita nacional también ha confirmado su existencia. De enero a octubre de este año, se registraron 53 ejecuciones, cuyas víctimas aparecieron con señales evidentes de tortura y con otras características típicas del modo de operar de los "escuadrones de la muerte". Además, la misma fuente y en el mismo período, registra 304 asesinatos atribuidos a "desconocidos" que, mientras no se investigue, se puede presumir están relacionados con los "escuadrones de la muerte".



A ONUSAL, en cambio, le ha costado mucho reconocer que aún existen estos "escuadrones de la muerte". Aunque en sus informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos trata de disimular la vulnerabilidad en la que se encuentran estos derechos fundamentales en El Salvador, al final, no tiene más remedio que reconocer su existencia; pero rehusa llamarlos por su nombre, sin duda, para no molestar al gobierno que hasta el último momento ha negado su existencia. Las amenazas de muerte contra personalidades políticas de la oposición, los religiosos y los sindicalistas son también una constante en dichos informes así como lo son el señalamiento de la obligación del gobierno de investigar estos hechos y la falta de interés por parte de éste. Pese a todo ello, la postura de ONUSAL en los casos donde es clara la motivación política ha sido ambigua. Por razones no aclaradas, en la práctica, ONUSAL tiende a considerar estos casos como delitos comunes. El asesinato del obispo castrense es un ejemplo ilustrativo de esta actitud de condescendencia culposa con el gobierno actual.

Así, en su octavo informe sobre derechos humanos, ONUSAL afirma con timidez que "no es posible descartar definitivamente que en su realización [muerte de personas no identificadas, algunas de ellas con mues-

tras de una violencia que va más allá de la intencionalidad de producir la muerte] participen antiguos miembros de grupos irregulares que actuaron en el país en la década de los 80. Ello podría explicar la similitud que parece existir en el modus operandi utilizado en las muertes precipitadas y el que en su momento caracterizó a los denominados escuadrones de la muerte" (VIII Informe, División de Derechos Humanos, 16, 15).

El Secretario General en su informe al Consejo de Seguridad se expresa con la misma circunspección que su misión en San Salvador, al declarar que las "ejecuciones arbitrarias" de los últimos meses "han hecho nacer la preocupación de que existen grupos ilegales, cuyos métodos parecen repetir las pautas de conducta que habían imperado anteriormente" (Nº 32). Naciones Unidas debiera estar más que preocupada, pues esos grupos que ella llama "ilegales" todavía no han sido investigados, ni desarticulados. Por lo tanto, ahí han estado siempre y han estado operando cada vez más abiertamente, desafiando a los acuerdos, al Estado, a la verificación de ONUSAL, a la procuraduría para la defensa de los derechos humanos, a la comunidad internacional y al pueblo salvadoreño.

Ante estos asesinatos políticos, el presidente Cristiani y el director de la Policía Nacional Civil prometen investigaciones "exhaustivas", "a fondo" y "profundas". El jefe de la misión de Naciones Unidas muestra su "preocupación extraordinaria". Estados Unidos los califica como un "insulto" y dice estar dispuesto a ayudar en la investigación con agentes del FBI. El FMLN exige una investigación inmediata y castigar a los culpables, aparte de reclamar la seguridad especial para sus dirigentes a la cual se había comprometido el gobierno por medio de la Policía Nacional Civil.

Esto es lo que se dice ahora, pero si el gobierno de Cristiani hubiese seguido la recomendación de la Comisión de la verdad en cuanto a investigar a los "escuadrones de la muerte" de manera profesional y con ayuda de cuerpos especializados extranjeros, si el gobierno de Estados Unidos hubiese sido más diligente y hubiese dicho la verdad sobre su existencia y sus modos de operación y financiamiento, si ONUSAL hubiese sido más firme y clara en su verificación y no hubiese contemporizado tanto con el gobierno sobre este asunto y, en concreto, sobre los derechos humanos, probablemente estos crímenes no se hubiesen cometido. Por lo tanto, las condenas y las promesas de investigación más bien parecen excusas por el deber no cumplido.

Si algo ha caracterizado la actuación del gobierno de Cristiani en el área del delito es la no investigación, lo cual imposibilita la identificación de los responsables y la administración de justicia, lo cual tiene

como consecuencia un elevado nivel de impunidad. Dada esta reconocida incapacidad para investigar el delito, de las falacias, de las promesas del gobierno y de sus comisiones de investigación no se puede esperar mucho. Es lo usual en estos casos. Sin embargo, ésta no deja de ser una oportunidad muy importante para que la transición al fin cambie las estructuras predominantes que permiten la existencia de los "escuadrones de la muerte".

Ahora bien, la única forma de hacerlo es investigando. La investigación del delito es un paso fundamental para asegurar el respeto de los derechos humanos de los salvadoreños. La presión internacional y nacional ha obligado al gobierno a comenzar a reconocer la posibilidad de la existencia de "escuadrones de la muerte" y a pedir ayuda internacional para investigarlos. Washington promete poner a disposición de los investigadores la documentación que posee sobre ellos. El FMLN habla de organizar una gran cruzada cívica para presionar al gobierno a investigar y a desarticularlos.

Una cosa es clara ahora, estos asesinatos no pueden atribuirse a la delincuencia común. Por eso, la derecha está tratando de buscar otras explicaciones para desviar la atención que, inevitablemente, se concentra en ella. Así, algunos de sus voceros han relacionado articiosamente las denuncias del arzobispado con la existencia de los "escuadrones de la muerte", dando a entender que aquéllas dieron origen a éstos. Otro argumento especioso es que los asesinatos obedecen a una purga interna del FMLN, lo cual, aunque ha ocurrido algunas veces en el pasado, en los casos actuales, es insostenible y sólo los incautos pueden pensar en ella seriamente. En cambio, sí es procedente preguntarse por la relación que pudiera haber entre estos asesinatos de los "escuadrones de la muerte" y las pugnas de poder en el interior de ARENA.

Al igual que en el pasado, algunos oficiales militares descontentos han revivido la antigua alianza con la derecha retrógrada, también descontenta con la marcha del país, para dar al traste con el proceso de transición. El descontento de los militares se origina en que no quisieran ser objeto de una segunda negociación que, además, preveen irá mucho más allá de lo que han podido ir los acuerdos de paz sobre la desmilitarización y la democratización de la Fuerza Armada. Durante las negociaciones de paz, la Fuerza Armada se consideró negociada por los civiles, pero ha logrado convivir con las transformaciones acordadas al conseguir no llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Si la coali-

Al igual que en el pasado, algunos oficiales militares descontentos han revivido la antigua alianza con la derecha retrógrada, también descontenta con la marcha del país...

ción Convergencia Democrática-FMLN se llegara a consolidar como la segunda fuerza política del país, el partido que ganase las elecciones tendría que negociar forzosamente con dicha coalición y, entonces, la Fuerza Armada se vería en una situación para la cual no está preparada. Uno de los objetivos de esta posible negociación sería avanzar en el sometimiento, de hecho y de derecho, de la Fuerza Armada al poder civil, lo cual esta última no parece estar dispuesta a permitir.

El descontento de la derecha "escuadronera" se origina en el desplazamiento económico al que ha sido sometida por la derecha financiera e industrializante. Los primeros han sido excluidos por los segundos de los beneficios de la política económica neoliberal y no estarían preparados para enfrentar las transformaciones inevitables de una posible integración centroamericana. De esta manera, el capital modernizante, representado por el presidente Cristiani, habría aprovechado las políticas económicas neoliberales para disminuir el poder económico de ese capital retrógrado al mismo tiempo que se preparaba para entrar en la nueva fase integracionista. En este sentido, el control de la banca y del crédito es un instrumento vital para conseguir ambos objetivos. Esta derecha apoya los acuerdos, está de acuerdo con modernizar las estructuras del poder y, segura de sí misma, no le teme a la convivencia con el FMLN. En cambio, la derecha retrógrada se encuentra amenazada económicamente y aislada políticamente. Su posición tradicional de poder y privilegio se encuentra en grave peligro.

De esta manera, como la fórmula electoral del partido de gobierno no satisface a los descontentos ni les da garantía alguna en cuanto a asumir su bandera, los militares y los capitalistas que no han podido entender las nuevas realidades nacionales han renovado su antigua alianza para combatir abiertamente el proceso de transición por medio de los "escuadrones de la muerte". En el pasado, los utilizaron para aniquilar a sus enemigos políticos; ahora vuelven a recurrir a ellos para detener los cambios estructurales que la transición trae consigo. Por eso no sería nada extraño encontrar en esta nueva alianza a los mismos militares y civiles del pasado.

Ahora bien, pese a estas diferencias en las bases del partido oficial y al distanciamiento objetivo que el gobierno de Cristiani ha promovido al favorecer a su grupo y aislar al otro, está por verse si cuando llegue el momento de las opciones últimas, la derecha más retrógrada podrá poner de su lado a la otra, tal como ha sucedido tantas veces en el pasado, o si la hora de la separación definitiva ha llegado. Un elemento en contra de esta última posibilidad es la vinculación personal y familiar que une a ambos grupos.

Por otro lado, es claro que el FMLN no debe responder en los mis-

mos términos a la provocación de los "escuadrones de la muerte". Hacerlo sería caer en la trampa y lanzar otra vez al país a la espiral de violencia derivada de la guerra sucia. El FMLN debe hacer acopio de toda su prudencia y lucidez política para no dejarse arrastrar por los "escuadrones de la muerte", mientras por otro lado pone todo su peso en exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, de modo especial en lo relacionado con los derechos humanos.

Estos asesinatos políticos que han sacudido a la conciencia nacional demuestran que no es un buen procedimiento tratar de disimular las violaciones de los derechos humanos en nombre de reconciliaciones y perdones falsos, sino que éstas deben ser denunciadas con toda claridad y firmeza. Si la investigación que ahora se anuncia se hubiese llevado a cabo tal como estaba previsto y si la presión de la sociedad civil se hubiese promovido antes, es decir, en el momento en que los "escuadrones de la muerte" reanudaron su actividad, esta clase de crímenes probablemente hubiese desaparecido ya del país.

La investigación es, pues, inevitable si en verdad se quiere poner fin de una vez por todas a esta clase de delito, cuyas raíces llegan hasta los comienzos de la década pasada y hasta la fundación del partido ARENA. El olvido, la amnistía y el pragmatismo no han demostrado ser una buena solución. Hay que advertir, sin embargo, que la investigación se quedará corta si sólo se limita a los autores materiales de los asesinatos de los dirigentes del FMLN sin llegar hasta los autores intelectuales o incluso si únicamente se restringe a esclarecer estos asesinatos en todas sus ramificaciones. Si así sucediera, muy poco se habría logrado. En el mejor de los casos, se esclarecerían los asesinatos políticos pre-electorales, pero la posibilidad del crimen político seguiría siendo real.

La investigación debe, por lo tanto, atender dos



puntos igualmente importantes. En primer lugar, debe esclarecer completamente estos asesinatos y todos los demás ocurridos después de la firma de los acuerdos de paz y atribuidos a "desconocidos" o directamente a "escuadrones de la muerte". En segundo lugar, la investigación también debe sacar a luz el origen, el desarrollo, la consolidación, el financiamiento, etc., de los "escuadrones de la muerte" en la década pasada. En este sentido, ayudaría muchísimo que Naciones Unidas tuviera la audacia de dar a conocer la versión completa de la sección del informe de la Comisión de la verdad dedicada a este tema y que Estados Unidos realmente pusiera a disposición de los investigadores documentación útil para esclarecer de una vez por todas este oscuro aspecto de la realidad salvadoreña.

Para esto, además de mucha audacia, es necesario un compromiso ineludible con la verdad y la justicia. El problema previsible es que en todo ello puede que estén implicados conocidos dirigentes de ARENA, altos oficiales de la Fuerza Armada y "respetables" miembros de la cúpula de la empresa privada. Esta sospecha aparece cada vez más corroborada a partir de las declaraciones de los ex miembros de la Fuerza Armada detenidos en las cárceles y a quienes se les ha negado la gracia de la amnistía. Estos testigos de primera mano han comenzado a proporcionar nombres, circunstancias y toda una serie de datos sobre sus actividades "escuadroneras" y terroristas en los ochenta. Así, pues, la investigación tiene ya tres fuentes de información, la Comisión de la verdad, el gobierno estadounidense y los testigos que guardan prisión en El Salvador.

Para encontrar la verdad no queda más alternativa que la investigación y para iniciarla ya hay suficientes pistas. Todavía está por verse, sin embargo, si una vez descubiertos los responsables de estas actividades terroristas, el gobierno actual (y en su caso, el de 1994) será capaz de llevarlos ante la justicia para que se les apliquen las sanciones establecidas por la ley. En el caso del martirio de los jesuitas, cuyo cuarto aniversario estamos celebrando, y en los otros casos investigados por la Comisión de la verdad, el gobierno actual no se atrevió a ello, sino que optó equívoca e inconstitucionalmente por la amnistía.

Se quiso olvidar voluntaristamente el pasado, se lo quiso borrar con una amnistía precipitada e inconstitucional, pero ese mismo pasado ha vuelto desafiante. El desafío es doble. Por un lado, los "escuadrones de la muerte" vuelven a la carga abiertamente, pero, por el otro, todavía existe la posibilidad de continuar ampliando y profundizando la verdad.

La investigación es inevitable también porque es políticamente absurdo pensar que los "escuadrones de la muerte" y la precariedad general en la que se encuentran los derechos humanos en el país no afectan la

solidez del proceso de paz. ¿Cómo se puede hablar de elecciones históricas cuando éstas siguen estando marcadas por el crimen político? ¿Qué novedad poseen estas elecciones cuando el asesinato político muestra que El Salvador ha cambiado muy poco? ¿Cómo se puede hablar de elecciones libres si los adversarios políticos siguen siendo asesinados a sangre fría e impunemente? ¿Cómo hablar de libertad para participar activamente en el evento electoral cuando se asesina con total libertad? ¿Cómo se puede votar libremente si se está bajo el terror del asesinato y de la amenaza?

Las repetidas y crecientes violaciones del derecho a la vida y la ineficacia del sistema judicial ponen en peligro todo el proceso. Si todo esto no se solventa, no hay duda de que después de once años de guerra civil, el pasado seguirá siendo presente. En realidad, siempre estuvo ahí, replegado y agazapado. Por lo tanto, mientras no se investigue, se administre justicia y se aplique la sanción respectiva, el caso de El Salvador seguirá abierto. La meta no es llegar a las elecciones para cerrar el expediente salvadoreño de Naciones Unidas, sino conseguir que los derechos humanos sean garantizados sólidamente por el Estado. De momento, el panorama es sombrío, los hechos nos recuerdan con su dureza que todos estamos aún a merced de los "escuadrones de la muerte" y de la injusticia.

San Salvador, 4 de noviembre de 1993.

